

RECURSO DE REVISIÓN: CESCJN/REV-45/2020

RECURRENTE: [REDACTED]

MINISTRO PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO

Ciudad de México. Resolución del Comité Especializado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente a la sesión de diez de junio de dos mil veintiuno.

VISTOS los autos para resolver el recurso de revisión **CESCJN/REV-45/2020**, y;

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Solicitud de información. El cinco de noviembre de dos mil veinte, [REDACTED] [REDACTED] realizó un requerimiento de información mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, mismo que fue registrado bajo el folio **0330000285320**, en el que solicitó, en versión digital, el expediente del amparo directo 47/2013, resuelto por la Primera Sala de este Alto Tribunal el siete de febrero de dos mil catorce.¹

SEGUNDO. Trámite y respuesta a la solicitud. Con motivo de la anterior solicitud, en acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veinte, el Subdirector General de Transparencia y Acceso a la Información ordenó formar el expediente **UT-J/0811/2020** y girar oficio a la Directora General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes solicitándole verificar

¹ La solicitud se presentó en los términos siguientes: “Al amparo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública con fundamento en los artículos 45, fracción II, 122 y 124 y último párrafo, solicito se me proporcione por este mismo medio la siguiente información: Se me otorgue el **EXPEDIENTE ÍNTEGRO EN FORMATO DIGITAL** del Amparo Directo 47/2013 resuelto por la Primera Sala de la SCJN el día 07 de febrero de 2014. OTROS DATOS PARA FACILITAR SU LOCALIZACIÓN: **MOOBING**”.

la disponibilidad de la información y remitir el informe respectivo. Aunado a lo anterior, en lo referente a la resolución recaída al amparo directo 47/2013, se ordenó remitir al solicitante el archivo correspondiente a dicha sentencia y proporcionar el vínculo electrónico en el que podría consultarla.

Mediante oficio **CDAACL-2104-2020**, de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, la titular del área requerida remitió el informe correspondiente, precisando que sí contaba con la información requerida y que era necesaria la elaboración de la versión pública para su entrega, por lo que remitió la cotización correspondiente. Dicha respuesta fue notificada al solicitante el veintiuno de noviembre de dos mil veinte, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

TERCERO. Interposición del presente recurso. A través del oficio **INAI/STP/DGAP/964/2020**, la Directora General de Atención al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales remitió a este Alto Tribunal el presente recurso de revisión.

CUARTO. Acuerdo de admisión. El veintiuno de enero de dos mil veintiuno, el Presidente de este Comité Especializado de la Suprema Corte de la Nación admitió el presente recurso de revisión, registrándolo bajo el rubro **CESCJN/REV-45/2020**. Asimismo, ordenó abrir el periodo de instrucción a fin de que las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera, ofrecieran pruebas y rindieran alegatos.

QUINTO. Acuerdo de cierre de instrucción. Posteriormente, mediante acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, el Presidente del Comité Especializado tuvo por presentados los alegatos de la Dirección General del Centro de Documentación

y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de este Alto Tribunal, así como los de la parte recurrente; decretó el **cierre del periodo de instrucción**; y ordenó turnar los autos del expediente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, al **Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo** para su resolución.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Este Comité Especializado es competente para conocer del presente asunto por tratarse de una solicitud de información de carácter jurisdiccional, pues su contenido está relacionado con el ejercicio de la función constitucional de impartición de justicia competencia de este Alto Tribunal².

SEGUNDO. Oportunidad. El presente recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 142 la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública³.

² Con fundamento en:

Constitución: Artículo 6, apartado A, fracción VIII, párrafo IV.

Acuerdo General de Administración 4/2015. De veintiséis de agosto de dos mil quince, por el que se alinean las estructuras administrativas y funcionales del Alto Tribunal a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Acuerdo del Comité Especializado de Ministros relativo a la sustanciación de los recursos de revisión que se interponen en contra del trámite de solicitudes de acceso a la información pública, en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Artículos primero, segundo y cuarto.

³ **Artículo 142.** El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el organismo garante que corresponda o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación.

En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al organismo garante que corresponda a más tardar al día siguiente de haberlo recibido

Notificación de la respuesta otorgada al solicitante	Plazo para la presentación del recurso de revisión	Presentación del recurso de revisión
21 de noviembre de 2020	24 de noviembre de 2020 al 14 de diciembre de 2020 ⁴	2 de diciembre de 2020

TERCERO. Procedencia. El presente recurso de revisión resulta procedente, toda vez que las manifestaciones realizadas por la parte recurrente encuadran en el supuesto de procedencia previsto en el artículo 143, fracción IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública⁵.

CUARTO. Agravios. La parte recurrente señaló, en esencia, **1)** que resulta incorrecto el establecimiento de un cobro por información entregada en modalidad electrónica; **2)** solicitó la revisión de la validez de los artículos 10, penúltimo párrafo, y 13 de los Lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación pues, a su juicio, son violatorios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; **3)** argumentó la violación a los principios que rigen el procedimiento de acceso a la información y **4)** se dolió de la falta de motivación y fundamentación de la respuesta.

QUINTO. Estudio. Este Comité Especializado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que devienen **infundados** los cuatro agravios expuestos por la parte recurrente a efecto de combatir la respuesta recaída a su solicitud de información. Lo anterior, al tenor de las siguientes consideraciones:

⁴ Los días veintiocho y veintinueve de noviembre, así como cinco, seis, doce y trece de diciembre, todos de dos mil veinte, fueron inhábiles por ser sábados y domingos, en términos del artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

⁵ **Artículo 143.** El recurso de revisión procederá en contra de:

[...]

IX. Los costos o tiempos de entrega de la información.

- **No se debe establecer un cobro por información entregada en modalidad electrónica.** En primer lugar, el particular sostuvo que el sujeto obligado se contradecía al fijar un cobro cuando la modalidad electrónica debe ser gratuita, en términos de lo dispuesto los artículos 17 y 125 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública⁶.

En específico, por cuanto al tipo de información requerida, señaló que el artículo 73, fracción II, de la referida Ley General, obliga al Poder Judicial de la Federación⁷ a elaborar las versiones públicas de las sentencias de interés público por lo cual deben garantizar también la consulta a todo lo que motivó al pronunciamiento de dicha sentencia. Asimismo, manifestó que la sentencia requerida es de gran relevancia para el país, pues en ella por primera vez se establecieron tesis aisladas sobre *moobing* o acoso laboral.

Por otra parte, el particular señaló haber identificado distintas respuestas del sujeto obligado (folios 0330000127119, 0330000033318, 0330000061820, 03300001237820, 0330000071920, 0330000072820), en los que se obstaculizó el derecho de acceso a la información cobrando costos para la

⁶ **Artículo 17.** El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada.

[...]

Artículo 125. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones.

En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen un domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar la notificación, se notificará por estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia.

⁷ **Artículo 73.** Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los sujetos obligados de los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

[...]

II. Las versiones públicas de todas las sentencias emitidas;

entrega de la información. En su opinión, ello resulta inadmisibile y contrario a lo dispuesto en los artículos 4, segundo párrafo, 6 y 18 de la Ley General en la materia⁸, así como lo establecido en el criterio de rubro: **“ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL”**⁹.

Posteriormente, señaló que lo realizado por la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial es violatorio de los principios que rigen todo el proceso de transparencia y acceso a la información pública: eficacia,

⁸ **Artículo 4.** [...]

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley.

Artículo 6. El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios.

Artículo 18. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

⁹ Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro digital: 169574. Instancia: Pleno Novena Época. Materias(s): Constitucional. Tesis: P./J. 54/2008. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII. Junio de 2008, página 743. Tipo: Jurisprudencia. Criterio cuyo texto es el siguiente: El acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por su doble carácter: como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. En efecto, además de un valor propio, la información tiene uno instrumental que sirve como presupuesto del ejercicio de otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia social de todo Estado de Derecho. Así, el acceso a la información como garantía individual tiene por objeto maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones; incluso algunos instrumentos internacionales lo asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales describen como el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por otro lado, el acceso a la información como derecho colectivo o garantía social cobra un marcado carácter público en tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración. Por tanto, este derecho resulta ser una consecuencia directa del principio administrativo de transparencia de la información pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

profesionalismo, legalidad y transparencia, previstos en el artículo 8, fracciones II, V, VIII y IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública¹⁰.

Para responder lo anterior es necesario recordar que el artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el principio de gratuidad en el acceso a la información, al establecer que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.¹¹

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la

¹⁰ **Artículo 8.** Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:

[...]

II. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información;

[...]

V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y

motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables;

[...]

VIII. Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y

[...]

IX. Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.

¹¹ **Artículo 6o.** La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

[...]

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

acción de inconstitucionalidad 5/2017¹², destacó que la gratuidad constituye un principio fundamental para el ejercicio del derecho de acceso a la información, cuyo objetivo es evitar la discriminación, pues tiene como finalidad que todas las personas, sin importar su condición económica, puedan acceder a la misma. Sin embargo, este principio no es absoluto, pues su ejercicio puede estar condicionado al pago de determinados conceptos fijados por la normativa aplicable a la materia.

Al respecto, este Alto Tribunal determinó que únicamente pueden realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción y envío de la información, así como los derechos relativos a la expedición de copias certificadas, conforme a lo establecido en la ley.

Posteriormente, al resolver la **acción de inconstitucionalidad 13/2018**¹³ este Alto Tribunal señaló que, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 17, 124, 133, 134 y 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no puede cobrarse la búsqueda de información pues el principio de gratuidad exime su cobro. Sin embargo, se aclaró que sí puede cobrarse al solicitante los costos de los materiales utilizados en la reproducción, el costo de envío y la certificación

¹² Resolución recaída a la Acción de Inconstitucionalidad 5/2017, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo la Ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, por mayoría de nueve votos de los señores Ministros José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek, en contra la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos y el señor Ministro Luis María Aguilar Morales. Página 25.

¹³ Resolución recaída a la Acción de Inconstitucionalidad 13/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo la Ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en sesión de seis de diciembre de dos mil dieciocho, por mayoría de diez votos de las señoras y señores Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I. (voto concurrente), Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek (voto concurrente), en contra el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz. Página 58.

de documentos. Lo anterior, analizando si dichas cuotas se fijaron de acuerdo con una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y de sus costos¹⁴ y que no constituyan una barrera desproporcionada de acceso a la información¹⁵.

De lo anterior se advierte que no le asiste la razón a la parte recurrente dado que, en su respuesta, el área requerida señaló que el costo correspondía a la impresión del expediente con excepción de la ejecutoria. Dicho de otra manera, el costo fijado no es atribuible a la digitalización de documentos sino al material necesario para la impresión de estos con motivo de la realización de la versión pública.

Ahora bien, en sus agravios la parte recurrente manifestó que la versión pública de la totalidad del expediente solicitado debe entregarse gratuitamente en atención a que se trata de una ejecutoria relevante y de interés público.

Si bien es cierto que las versiones públicas de todas las sentencias emitidas por este Alto Tribunal deben entregarse de

¹⁴Por ejemplo, el INAI expidió y publicó en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril de 2017 los “**Lineamientos por los que se establecen los costos de reproducción, envío o, en su caso, certificación de información**” con base en análisis de costos de reproducción, envío y certificación de información. En sus considerandos señaló: “*Que la Dirección General de Administración del INAI realizó un análisis de costos de reproducción, envío y certificación de información, en las diversas modalidades en las que éstos se generan. En este análisis, solamente se toman en cuenta los costos directos unitarios y, además, se considera que el acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales son derechos humanos, por lo que el costo responde a la racionalidad de los mismos.*” Asimismo, en su artículo décimo tercero prevé la actualización de los costos de reproducción, envío o certificación: La Dirección General de Administración cada año, a más tardar en el mes de febrero, realizará un estudio respecto de los costos a que se refieren estos lineamientos, y los hará llegar al Pleno para que tome la determinación que corresponda.

Lo anterior, hace referencia a establecer cuotas que sean objetivas y razonables conforme al derecho humano de acceso a la información, las cuales no deben resultar inalcanzables para los ciudadanos. Además, los costos establecidos deben ser igual para los que reciben el mismo servicio.

¹⁵**EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LAS AMÉRICAS.** Estándares Interamericanos y comparación de marcos legales, párr. 468. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 30 de diciembre de 2011.

forma gratuita atendiendo a su relevancia e interés público, dicha gratuidad no puede hacerse extensiva a la totalidad de las constancias que comprenden un expediente judicial, pues dichos documentos tienen una distinta naturaleza y normativa aplicable para su publicación.

Se destaca, en primer lugar, que una versión pública es aquel documento del cual se suprime la información considerada legalmente reservada o confidencial, de conformidad con el marco normativo aplicable en materia de transparencia y acceso a la información de este Alto Tribunal.¹⁶

Sobre este tema, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, **al resolver el amparo en revisión 271/2020¹⁷**, determinó que todas las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales tanto federales como locales constituyen información de interés público y, por tanto, existe la obligación de los Poderes Judiciales de poner a disposición de la sociedad las versiones públicas de éstas.

¹⁶ De conformidad con lo establecido en el artículo 86 del **ACUERDO GENERAL DE LA COMISIÓN PARA LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEL NUEVE DE JULIO DE DOS MIL OCHO, RELATIVO A LOS ÓRGANOS Y PROCEDIMIENTOS PARA TUTELAR EN EL ÁMBITO DE ESTE TRIBUNAL LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, A LA PRIVACIDAD Y A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES GARANTIZADOS EN EL ARTÍCULO 6o. CONSTITUCIONAL**. Precepto que es del tenor siguiente:

Artículo 86. Por versión pública se entenderá el documento del cual se suprima la información considerada legalmente reservada o confidencial, de conformidad con el marco normativo aplicable en materia de transparencia y acceso a la información de la Suprema Corte.

La elaboración de la versión pública de cualquier documentación tiene por objeto otorgar acceso a la información al gobernado que la solicite, así como difundirla, protegiendo la información considerada legalmente como confidencial o reservada.

¹⁷ Sentencia recaída al Amparo en Revisión 271/2020, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo la Ponencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en sesión de tres de febrero de dos mil veintiuno, por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo (voto concurrente), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (voto concurrente) y de la señora Ministra Ana Margarita Ríos Farjat; en contra la señora Ministra Norma Lucía Piña Hernández. Páginas 63 y 64.

En efecto, en dicho asunto la Primera Sala sostuvo que *“la divulgación y el fácil acceso a las sentencias emitidas por los tribunales del país se torna de la mayor relevancia, no solo para las partes involucradas en los litigios correspondientes, sino para toda la sociedad mexicana, pues su comprensión permite, en todos momento y con mayor precisión, conocer que conductas están permitidas, prohibidas u ordenadas en la abstracción normativa, así como tener plena certeza del cómo los jueces al individualizarlas las interpretan, razonan y aplican, por lo que la divulgación de las sentencias resulta fundamental para conocer cómo la legislación es entendida por los jueces y concretizada en los casos puestos a su jurisdicción”*.¹⁸

Incluso, con anterioridad a la emisión de dicho criterio por parte de la Primera Sala, este Comité Especializado, al resolver el recurso de revisión **CESCJN/REV-43/2019**¹⁹ el trece de noviembre de dos mil diecinueve, ya se había pronunciado sobre la gratuidad en la entrega de las versiones públicas de resoluciones emitidas por este Alto Tribunal.

En dicha ocasión este Comité precisó que resultaba fundamental que se pusieran a disposición del público en general todas las versiones públicas de este tipo de resoluciones y, por ende, determinó que el Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no podía establecer una fijación de costos por la elaboración de la versión pública de una sentencia emitida por este Alto Tribunal, puesto que **es obligatorio generar dichos documentos y ponerlos a disposición del público en general.**

¹⁸ Ibid. Página 62.

¹⁹ Resolución recaída al recurso de revisión CESCJN/REV-43/2019, emitida por este Comité Especializado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo la Ponencia de la señora Ministra Yasmín Esquivel Mossa, en sesión de trece de noviembre de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos de los señores Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y señora Ministra Yasmín Esquivel Mossa. Página 19.

Lo anterior, sin prejuzgar sobre los costos que pudieran generarse en atención al medio de reproducción o entrega de la información solicitada.

Así las cosas, resulta claro que, atendiendo a la importancia y trascendencia de estos documentos, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la obligación de entregar de manera gratuita **todas las versiones públicas de sentencias que ha emitido**, tanto a través de su Pleno como por sus Salas. Ello, sin perjuicio de los cobros que pudieran surgir en atención a los medios de reproducción y de entrega seleccionados por la parte solicitante.

No obstante, dicha obligación de gratuidad no tiene el alcance pretendido por la parte recurrente, pues es incorrecto sostener que deba hacerse extensiva a la totalidad del expediente del asunto correspondiente y, por tanto, deba entregarse también de manera gratuita la totalidad de las constancias que obran en un expediente, distintas a la ejecutoria.

La obligación de gratuidad sobre la entrega de versiones públicas de las sentencias de este Alto Tribunal atiende a la naturaleza misma de este tipo de documentos, pues es a través de estos que se dirimen los fondos de controversias o se definen las pretensiones de las partes mediante la individualización de normas generales, abstractas e impersonales, además de que permiten a la sociedad mexicana conocer la manera en cómo los jueces y juezas desarrollan y dotan de significado al ordenamiento jurídico, precisamente, por delimitar el sentido y alcance de las normas aplicables, con la consecuente producción de un precedente.²⁰

²⁰ Sentencia recaída al Amparo en Revisión 271/2020, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo la Ponencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en sesión de tres de febrero de dos mil veintiuno, por

Por el contrario, la información contenida dentro de los diversos documentos y actuaciones que componen un expediente judicial tiene una naturaleza distinta, y la normativa aplicable para su publicación también es distinta.

En el caso concreto, a efecto de dar respuesta a la solicitud de entrega de la versión pública del expediente correspondiente al amparo en directo 47/2013, el Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes precisó que el mismo se encontraba bajo resguardo del Archivo Central de este Alto Tribunal y que se identificó que contiene el nombre del promovente, terceros interesados, domicilios, firma autógrafa y datos de salud, por lo que se emitió la fijación de costos respectiva.

Lo anterior atendiendo a que conforme al artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública²¹, se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. Ese mismo precepto prevé que a esta información sólo podrán tener acceso los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.

En relación con lo anterior, el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

mayoría de cuatro votos de los señores Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo (voto concurrente), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (voto concurrente) y de la señora Ministra Ana Margarita Ríos Farjat; en contra la señora Ministra Norma Lucía Piña Hernández. Página 61.

²¹ **Artículo 116.** Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.
[...]

Gubernamental²² dispone que cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo generará la versión pública de las resoluciones requeridas suprimiendo el nombre de las partes así como cualquier otra información de carácter personal que contengan, procurando que la referida supresión no impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional.

Así las cosas, la Titular del referido Centro estableció un monto en concepto de impresión correspondiente a \$282.00 (doscientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), para realizar la versión pública de quinientas sesenta y cuatro fojas del expediente correspondiente al amparo directo 47/2013, sin contar las fojas correspondientes a la ejecutoria recaída a dicho asunto²³.

²² **Artículo 8.** Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los Órganos Jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8º de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo generará la versión pública de las resoluciones requeridas suprimiendo el nombre de las partes así como cualquier otra información de carácter personal que contengan, procurando que la referida supresión no impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional.
[...]

Aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8º de la Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional.

²³

FORMATO DE REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN				
Nombre Del peticionario: No menciona			Número de solicitudes: 03300000285320	
Información solicitada	Modalidad de entrega de la información		Cantidad del material	Subtotal
Amparo Directo 47/2013 Primera Sala (Versión pública del expediente con excepción de la ejecutoria)		Costo unitario:		
	Disquete	\$4.00		\$0.00
	Disco compacto	\$10.00		\$0.00
	DVD	\$60.00		\$0.00
	Copia Simple	\$0.50		\$0.00
	Copia certificada	\$1.00		\$0.00
	Audiocasete	\$12.00		\$0.00
	Videocasete	\$30.00		\$0.00
	Digitalización de la Versión Pública	\$0.10		\$0.00

Este Comité Especializado estima que, en términos de lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resulta correcta la generación de costos de reproducción de la información con motivo de los materiales utilizados para la elaboración de la versión pública de un documento.

*“**Artículo 137.** Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la información.
La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo.
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado.”*

Esta facultad de cobro incluso ha sido validada también por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al resolver el **recurso de revisión 08817/20²⁴**, interpuesto en contra de una respuesta emitida por el área de transparencia del Consejo de la Judicatura Federal como sujeto obligado.

Si bien dicho criterio no resulta vinculante para este Comité Especializado, se estima adecuado destacar que concordantemente con los argumentos expuestos en esta resolución, el referido Instituto reconoció que el mencionado artículo faculta a las autoridades federales a requerir a los particulares el pago de los costos de reproducción o envío tenga

	Impresión para la Generación de la Versión Pública	\$0.50	564	\$282.00
Total:				\$282.00

²⁴ Resolución recaída al recurso de revisión 08817/20, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales bajo la Ponencia de la Comisionada Josefina Román Vergara, en sesión de nueve de diciembre de dos mil veinte, por unanimidad de siete votos de las Comisionadas Norma Julieta Del Río Venegas, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Josefina Román Vergara y Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Adrián Alcalá Méndez, Oscar Mauricio Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

un costo, precisando que su elaboración procede hasta que la persona solicitante acredite haber cubierto el pago respectivo.²⁵

Asimismo, el Instituto precisó que si bien existen casos en que los sujetos obligados cuentan con un expediente electrónico, como también lo señala el aquí recurrente, ello no exime a la parte solicitante de cubrir los costos de reproducción para la elaboración de versiones públicas, toda vez que esto implica un ejercicio de revisión de los datos de todas y cada una de esas actuaciones de manera impresa para testar aquellos que tengan carácter confidencial, más aún si no se tiene una herramienta o programa de carácter informático que elabore versiones públicas a partir del expediente electrónico.²⁶

Por otra parte, en lo tocante a la presunta violación de los principios contemplados en el artículo 8, fracciones II, V, VIII y IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité Especializado estima necesario precisar que los principios previstos en dicho artículo rigen el funcionamiento y actuación de los organismos garantes del derecho de acceso a la información.

En términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 3 de la Ley General en comento, los organismos garantes son aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de acceso a la información y protección de datos personales en términos de los artículos 6o., 116, fracción VIII y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese sentido, resulta claro que ni la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial ni el

²⁵ Ibid. Páginas 68 y 69.

²⁶ Ibid. Página 80.

área requerida en el caso concreto son organismos garantes, por lo que el artículo 8 de la Ley General que refiere la parte recurrente no les resulta aplicable.

No obstante, los artículos 9 a 22 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública sí prevén diversos principios aplicables de forma general en la materia. Algunos de ellos se abordarán en páginas siguientes, al dar contestación al tercer agravio hecho valer por la persona peticionaria.

- **Solicitud de revisión de validez.** La parte recurrente solicitó al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales revisar lo dispuesto en los artículos 10, penúltimo párrafo, y 13 de los Lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación²⁷

²⁷ **Artículo 10**

Del procedimiento sumario

[...]

Cuando la solicitud requiera la reproducción de la información en copia impresa o electrónica, se entregará preferentemente de inmediato y una vez enterada la respectiva cuota de acceso.

Artículo 13

De las versiones públicas

Realizada la consulta física del expediente, en caso de que se requiera copia de constancias, el archivo o área de resguardo del expediente llevará a cabo la cotización de dichas copias y comunicará al solicitante que se deberá elaborar una versión pública de lo requerido, así como el tiempo de entrega atendiendo a las cargas de trabajo del área respectiva.

El solicitante deberá acreditar ante el Módulo de Información y Acceso a la Justicia haber realizado el pago correspondiente.

El Módulo de Información y Acceso a la Justicia deberá comunicar al encargado del archivo o área del depósito, que el solicitante ya efectuó el pago correspondiente con la finalidad de que genere la versión pública.

El encargado del archivo o área de depósito correspondiente hará entrega de la versión pública al Módulo de Información y Acceso a la Justicia para que notifique al solicitante de inmediato, por vía electrónica o cualquiera seleccionada por éste, la posibilidad de que acuda al propio Módulo de Información y Acceso a la Justicia por la información requerida.

El Módulo de Información y Acceso a la Justicia llevará a cabo la entrega de la versión pública y recabará el acuse de recibo correspondiente e integrará la estadística correspondiente, con los datos del formato de solicitud recabado y los

pues, a su juicio, son violatorios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Lo anterior en atención a que, en su interpretación, bajo estos preceptos siempre se van a cobrar cuotas por acceder a la información sin necesidad de motivar ni fundamentar con claridad las razones por lo que debe hacerse dicho cobro. Refiere que les basta con mencionar tales Lineamientos para proceder a cobrar las “cuotas de acceso”.

Además, considera que se contradice al mencionado cuerpo normativo al establecer que se creará una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante realice el pago íntegro del costo de la información que solicitó según lo dispone el artículo 141 de la referida Ley General.

Asimismo, indicó que no tiene por qué efectuarse el cobro para acceder a la información solicitada pues el Sujeto Obligado al proponer que procederá a *“imprimir y, posteriormente, digitalizar la información”*, se presume que cuenta con la tecnología necesaria para procesar la información en la modalidad solicitada; no hay necesidad de que se genere un “soporte material” si se usan de manera eficaz las tecnologías de la información como lo dice el artículo 21 de los Lineamientos en mención, dado que al utilizar software para editar archivos en formato electrónico no se genera ni costo de reproducción ni costos de envío. Solo se observa un medio de recaudación a una cuenta que no proporciona y que contradice al artículo 141 de la referida ley, para bloquear a los titulares del derecho a obtener la información.

recibos de pago respectivos, debiendo remitir la estadística de manera mensual a la Unidad General.

Al respecto, como quedó manifiesto desde el acuerdo de admisión, compete exclusivamente a este Comité Especializado resolver el presente recurso de revisión por tratarse de un asunto relacionado con el ejercicio de la función constitucional de impartición de justicia de este Alto Tribunal.

En consecuencia, se examinaron las constancias que integran el expediente del recurso de revisión, observando que ni el área requerida ni la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial aplicaron los citados artículos en la atención de la solicitud de información, por lo que resulta innecesario que este Comité Especializado estudie su validez, pues ello a ningún efecto práctico llevaría en el caso concreto.

Por otra parte, el particular hace referencia a que, de conformidad con el artículo 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública²⁸, en la respuesta proporcionada se debía otorgar una cuenta bancaria en la cual pudiera realizar el pago íntegro del costo de la información que solicitó, la cual no se le dio a conocer y, en consecuencia, se obstaculizó su derecho a obtener la información.

²⁸ **Artículo 141.** En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de:

I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;

II. El costo de envío, en su caso, y

III. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda.

Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley Federal de Derechos, los cuales se publicarán en los sitios de Internet de los sujetos obligados. En su determinación se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, asimismo se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante realice el pago íntegro del costo de la información que solicitó.

Los sujetos obligados a los que no les sea aplicable la Ley Federal de Derechos deberán establecer cuotas que no deberán ser mayores a las dispuestas en dicha ley.

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante.

Lo anterior resulta también incorrecto pues, contrario a lo aducido por la parte recurrente, si bien el artículo 141 de la Ley General se refiere a la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante realice el pago íntegro del costo de la información que solicitó, no se advierte mandato de informar los datos de la cuenta o referencia bancaria desde la respuesta, dado que ello atiende a las particularidades de los procedimientos internos de atención de solicitudes de información que instauran las Unidades de Transparencias conforme a las atribuciones que tienen conferidas en las fracciones IV y VI de la multicitada Ley General²⁹.

En relación con lo anterior, este Comité Especializado advierte que en la respuesta otorgada por el Subdirector General de Transparencia y Acceso a la Información³⁰, se observa que indicó al peticionario que *“...El pago lo podrá realizar mediante referencia bancaria, para lo cual deberá comunicarse al 55-4113-1212, con el objeto de recibir la asesoría, así como la línea de captura correspondiente”*. Por tanto, se concluye que si bien no se le proporcionó directamente la referencia bancaria, sí se le facilitó información suficiente para establecer contacto y allegarse de los datos bancarios.

- **Violación a los principios que rigen el procedimiento de acceso a la información.** La persona solicitante precisó que conforme a lo dispuesto en los artículos 11, 12, 13, 17 y 21 de la

²⁹ **Artículo 45.** Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que tendrá las siguientes funciones:

[...]

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información;

[...]

VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable;

³⁰ Notificada al particular el veintiuno de noviembre de dos mil veinte mediante la Plataforma Nacional de Transparencia.

referida Ley General³¹, la información debe ser pública, completa, oportuna y accesible; los sujetos obligados deben habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles; la información debe generarse de forma accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atendiendo a las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona, de manera gratuita; y la sustanciación del procedimiento debe realizarse de forma sencilla y expedita.

Este Comité Especializado no advierte alguna falta de observancia a los principios en materia de transparencia y acceso a la información pública que señala la parte recurrente. Ello en razón de que, como se ha expuesto previamente, el ejercicio derecho al acceso a la información está sujeto a las formas, mecanismos y condiciones que establece la normativa aplicable.

Así, como ha quedado comprobado en la presente resolución, la solicitud fue turnada y atendida por el área competente para tal efecto, es decir, por el Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, por lo que se presume que la información es confiable, verificable, veraz, oportuna y completa.

³¹ **Artículo 11.** Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

Artículo 12. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, así como demás normas aplicables.

Artículo 13. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona.

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.

Artículo 21. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la información deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita, de conformidad con las bases de esta Ley.

Aunado a ello, el sujeto obligado no negó el acceso a la información a la persona peticionaria, sino que, de manera fundada y motivada, indicó que era necesario elaborar una versión pública del expediente requerido, situación que se encuentra contemplada y permitida por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Finalmente, no se observa que en el procedimiento de acceso a la información se hayan impuesto mayores requisitos a los previstos en la normativa ni que existiera demora en la atención de la solicitud, por lo que en efecto cumple con las características de ser sencillo y expedito.

- **Falta de motivación y fundamentación.** La persona peticionaria manifestó que la respuesta combatida carece de fundamentación y motivación pues los artículos 23 y 24, fracciones III, IV, V, VIII, IX y XII de la Ley General³² establecen que es obligación de los sujetos obligados estar ampliamente capacitados y especializados en los procedimientos de

³² **Artículo 23.** Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:

III. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los Comités y Unidades de Transparencia;

IV. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a la normatividad aplicable;

V. Promover la generación, documentación y publicación de la información en Formatos Abiertos y Accesibles;

[...]

VIII. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia de transparencia y acceso a la información, realicen los Organismos garantes y el Sistema Nacional;

IX. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a éstos;

[...]

XII. Difundir proactivamente información de interés público;

transparencia. Ello, a su juicio, implica también un eficaz manejo de las tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a estos para los gobernados.

En ese sentido, resulta importante precisar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas³³.

En concordancia con el criterio anterior, se advierte que en el caso concreto la respuesta recaída a la solicitud de información de la cual deriva el presente asunto **sí está debidamente fundada y motivada**.

Lo anterior en razón de que la **motivación** consiste en el extracto de la respuesta del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, en la que señaló que de la búsqueda realizada en el Sistema de Administración y Consulta de Expedientes Judiciales se identificó el Amparo Directo

³³ Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro digital: 238212. Instancia: Segunda Sala. Séptima Época. Materias(s): Común. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 97-102, Tercera Parte, página 143. Tipo: Jurisprudencia. Cuyo texto es el siguiente: De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.

47/2013 del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al que además se encuentra integrada la resolución del expediente de la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 209/2013 del índice de la misma Sala y en la precisión de los costos de reproducción de las constancias que integran el expediente 47/2013, así como las razones por las cuales era necesario elaborar una versión pública de las mismas -por contener diversos datos personales-.

En lo correspondiente a la debida **fundamentación**, el Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes plasmó en su respuesta los artículos que refieren al proceso de clasificación de la información como confidencial³⁴ y que justifican la necesidad de elaborar una versión pública para suprimir determinados datos personales en las versiones públicas de los expedientes y sentencias que obran en poder de este Alto Tribunal.

Ahora bien, contrario a lo que alega la parte recurrente sobre la presunta obligación a cargo de las personas servidoras públicas de generar la versión pública en programas informáticos, el procedimiento que lleva a cabo el referido Centro a efecto de proteger los datos personales contenidos en el expediente en comento, resulta adecuado y conforme con las obligaciones que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en materia de

³⁴ En el oficio CDAACL-2104-2020 de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, el área requerida señaló la siguiente fundamentación: "...*artículos 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; punto segundo, párrafo segundo del Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales; 8, primer y tercer párrafos, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 86 y 87, fracciones I y III del Acuerdo General de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del nueve de julio de dos mil ocho; puntos 1, 5, inciso a) y 6, inciso c), de las Recomendaciones para la Supresión de Datos Personales en las Sentencias dictadas por el Pleno y las Salas de este Alto Tribunal*"

protección de datos personales, como son las previstas en los artículos quincuagésimo octavo y quincuagésimo noveno, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el quince de abril de dos mil dieciséis.

***“Quincuagésimo octavo.** Los sujetos obligados garantizarán que los sistemas o medios empleados para eliminar la información en las versiones públicas no permitan la recuperación o visualización de la misma.”*

***“Quincuagésimo noveno.** [...] La información deberá protegerse con los medios idóneos con que se cuente, de tal forma que no permitan la revelación de la información clasificada.”*

En asuntos que fueron de previo conocimiento de este Comité Especializado, como los recursos de revisión **CESCJN/REV-73/2019**³⁵ y **CESCJN/REV-74/2019**³⁶ resueltos el veinte de febrero y veinticuatro de noviembre, ambos de dos mil veinte, la Titular del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de leyes ha manifestado que el cobro que se realiza al elaborar la versión pública de documentos como los que ahora se solicitan atiende a que, si bien, los expedientes se encuentran digitalizados y el software PaperPort permite testar un documento electrónico, lo cierto es que, para obtener las versiones públicas que se solicitan se identificó que existen herramientas tecnológicas que recuperan la información suprimida, exponiendo la información considerada de carácter

³⁵ Resolución recaída al recurso de revisión CESCJN/REV-73/2019, emitida por este Comité Especializado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo la ponencia del señor Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en sesión de veinte de febrero de dos mil veinte, por unanimidad de votos de los señores Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y señora Ministra Yasmín Esquivel Mossa. Páginas 17 y 18.

³⁶ Resolución recaída al recurso de revisión CESCJN/REV-74/2019, emitida por este Comité Especializado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo la ponencia de la señora Ministra Yasmín Esquivel Mossa, en sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, por unanimidad de votos de los señores Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y señora Ministra Yasmín Esquivel Mossa. Página 17.

confidencial. Tales herramientas son el propio software PaperPort, Adobe Reader (versión gratuita), Microsoft Word y PDF Viewer Plus; por tanto, es necesario imprimir la versión testada y posteriormente digitalizar nuevamente el documento.

De lo expuesto por la referida Titular se advierte que, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los puntos Quincuagésimo Octavo y Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el quince de abril de dos mil dieciséis, el referido Centro lleva a cabo un procedimiento de impresión y digitalización de documentos para elaborar las versiones públicas correspondientes que asegura la no recuperación, visualización o revelación de la información clasificada como confidencial.

A juicio de este Comité Especializado, el procedimiento anterior resulta concordante con la obligación prevista en el artículo 119 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; precepto que impone a los sujetos obligados la obligación de procurar que la información que fue suprimida de las versiones públicas no pueda ser recuperada o visualizada.³⁷

Lo anterior es así pues, atendiendo a lo expuesto por el área requerida en los recursos de revisión señalados, si bien el expediente está digitalizado y el software *PaperPort* permite testar un documento electrónico, también es cierto que existen herramientas tecnológicas que recuperan la información

³⁷**Artículo 119.** Los sujetos obligados deberán procurar que los sistemas o medios empleados para eliminar la información en las versiones públicas no permitan la recuperación visualización de la misma.

suprimida. Por ende, resulta necesario imprimir la versión testada y posteriormente digitalizar nuevamente el documento.

Atendiendo a lo previamente expuesto, este Comité Especializado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación **confirma la respuesta y la cotización**, efectuadas por la Titular del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de este Alto Tribunal en el oficio **CDAACL-2104-2020**, de diecisiete de noviembre de dos mil veinte; mismas que fueron notificadas al ahora recurrente a través de la respuesta del Subdirector General de Transparencia y Acceso a la Información, el veintiuno de noviembre de dos mil veinte.

En similares términos se pronunció el Comité Especializado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los recursos de revisión **CESCJN/REV-73/2019** y **CESCJN/REV-74/2019**, mediante resoluciones de veinte de febrero y veinticuatro de noviembre, ambas de dos mil veinte, así como en las resoluciones dictadas en los recursos de revisión **CESCJN/REV-75/2019**, **CESCJN/REV-104/2019** y **CESCJN/REV-10/2020**, todas de tres de junio de dos mil veintiuno.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E:

PRIMERO. Resulta **infundado** el presente recurso de revisión.

SEGUNDO. Se confirma la respuesta y la cotización recaídas a la solicitud de información con folio **0330000285320**, dictadas por la Titular del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de este Alto Tribunal el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en autos del expediente **UT-**

J/0811/2020.

Notifíquese a la parte recurrente por conducto de la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial. Asimismo, se instruye a la citada Unidad para que remita a la Secretaría de Seguimiento de Comités de Ministros, la constancia de notificación respectiva para que se integre al expediente en el que se actúa.

Notifíquese al Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Secretaría de Seguimiento de Comités de Ministros; y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido.

Por unanimidad de votos lo resolvió el Comité Especializado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrado por los señores Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá (Presidente), Javier Laynez Potisek y Jorge Mario Pardo Rebolledo (Ponente); quienes firman con el Secretario de Seguimiento de Comités de Ministros, Manuel Alejandro Téllez Espinosa, que autoriza y da fe.

Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial
Versión pública del Recurso de Revisión CESCJN/REV-045/2020.
Contiene la siguiente información confidencial: Nombre del solicitante.
En términos de lo previsto en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como confidencial, que encuadra en dichos supuestos normativos.

Identificador de proceso de firma: 63815

[illegible][illegible]

Identificador de proceso de firma: 63815

Firmante	Nombre	JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	PARJ610201HVZRBR07			
Firma	Serie del certificado del firmante	706a6673636a6e000000000000000000000019d1	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	17/06/2021T05:28:24Z / 17/06/2021T00:28:24-05:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma				
		2e 79 2e 5b 11 b5 44 aa a2 d5 c7 af d4 3b 95 4a f4 87 c0 9e e0 5e 3e b3 b8 a8 62 54 01 e8 2a 6d 26 83 25 56 f5 a4 51 b0 61 04 1f 42 04 a9 68 0b 6d 11 6a 8b 00 88 25 1c 9b 58 7c a9 af 73 37 3c 7d 18 2a e4 74 c2 3e a2 da 51 19 07 11 5c 98 38 87 ba fa 9e 66 fb 78 b6 42 4f e9 9d ca 42 7a 0a 00 38 46 20 6d 03 c5 48 04 b4 de de 01 a0 d6 43 3f f1 03 7f ce ff 45 ff 7f 14 fe 69 df 8a a7 f5 1b 3e 5b b4 25 ee 53 f0 cd 57 83 7f 2c 76 52 92 ec c4 39 a4 00 31 7f e1 98 0d 93 86 46 ff 5c 6c bd 5a 5b cd 53 c4 9b ff 9d ab 24 fe 66 bb be 72 e5 a7 15 90 ef ba 34 8d 3e 2a 9c 21 3f f1 7f 63 87 67 70 a4 61 5d a6 42 4f a8 4b 72 95 d9 f4 ca 2e e1 2b a2 38 51 09 46 bd b4 3f 85 62 df d8 37 7f 4c ca 6b d1 6f 81 31 02 e0 d2 c7 9d c2 f8 70 d8 6a b7 2a 79 26 f5 67 96 72 24 ba 12 85 96 6a			
Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	17/06/2021T05:28:24Z / 17/06/2021T00:28:24-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP	706a6673636a6e000000000000000000000019d1			
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	17/06/2021T05:28:24Z / 17/06/2021T00:28:24-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	3908174			
	Datos estampillados	6DC263C7EDAB0F5FFC92584747DF5012C35B3160CCD1DFC3A4ECC4BEDF1DBC29			

[illegible]